



**Convención contra la
tortura y otras penas o
tratos crueles, inhumanos
o degradantes**

Distr.
GENERAL

CAT/C/SR.338
30 de junio de 1998

ESPAÑOL
Original: FRANCÉS

COMITÉ CONTRA LA TORTURA

20º período de sesiones

ACTA RESUMIDA DE LA PRIMERA PARTE (PÚBLICA)* DE LA 338ª SESIÓN

celebrada en el Palacio de las Naciones, Ginebra,
el lunes 18 de mayo de 1998, a las 10.00 horas

Presidente: Sr. BURNS

SUMARIO

CUESTIONES DE ORGANIZACIÓN Y OTROS ASUNTOS

EXAMEN DE LOS INFORMES PRESENTADOS POR LOS ESTADOS PARTES EN VIRTUD DEL
ARTÍCULO 19 DE LA CONVENCIÓN

Informe inicial de Sri Lanka

* El acta resumida de la segunda parte (privada) de la sesión se publica
con la signatura CAT/C/SR.338/Add.1.

La presente acta podrá ser objeto de correcciones.

Las correcciones deberán redactarse en uno de los idiomas de trabajo.
Dichas correcciones deberán presentarse en forma de memorando y, además,
incorporarse en un ejemplar del acta. Las correcciones deberán enviarse, dentro
del plazo de una semana a partir de la fecha del presente documento, a la
Sección de Edición de los Documentos Oficiales, Oficina E.4108, Palacio de las
Naciones, Ginebra.

Las correcciones que se introduzcan en las actas se reunirán en un
documento único que se publicará poco después de la clausura del período de
sesiones.

Se declara abierta la sesión a las 10.10 horas

CUESTIONES DE ORGANIZACIÓN Y OTROS ASUNTOS (tema 5 del programa) (continuación)

1. El PRESIDENTE observa que en varios casos, los informes presentados al Comité han revelado que los malos tratos no tienen el mismo efecto en las mujeres que en los hombres, y que el trato que se dispensa a determinados grupos de niños, en particular los niños de la calle, entra en el ámbito de aplicación del artículo 1 o del artículo 16. Algunos casos de discriminación, sin corresponder exactamente al artículo 1, han conmovido a los miembros del Comité. Sin embargo, el Comité se detiene apenas en esos problemas. Tal vez podría considerar el nombramiento de tres relatores, encargados, respectivamente, de los problemas específicos de la situación de la mujer, del trato a los niños y de la cuestión de la discriminación, que examinarían todos los informes presentados por los Estados Partes desde una de esas perspectivas específicas con la finalidad de señalar a la atención del Comité los temas que, de otro modo, podría pasar por algo. El Presidente invita a los miembros del Comité a que reflexionen sobre esta sugerencia y a que propongan sus servicios para desempeñar esas funciones.

EXAMEN DE LOS INFORMES PRESENTADOS POR LOS ESTADOS PARTES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 19 DE LA CONVENCIÓN (tema 7 del programa) (continuación)

Informe inicial de Sri Lanka (CAT/C/28/Add.3)

2. Por invitación del Presidente, el Sr. Palihakkara, el Sr. Yapa, el Sr. Grero y el Sr. Arachichi (Sri Lanka) toman asiento a la mesa del Comité

3. El PRESIDENTE da la bienvenida a la delegación y la invita a presentar el informe inicial de Sri Lanka (CAT/C/28/Add.3).

4. El Sr. PALIHAKKARA (Sri Lanka) recuerda que Sri Lanka es Parte en 13 instrumentos internacionales de derechos humanos, entre ellos la Convención contra la Tortura, y señala que el país mantiene firmemente su adhesión a la defensa y protección de los derechos humanos, pese a todas las dificultades encontradas por las autoridades para vencer el problema del terrorismo que desde hace tantos años afecta a Sri Lanka. Por otra parte, el Gobierno está convencido de que es necesario debatir abierta y democráticamente esos problemas para solucionarlos. En ese contexto, considera muy valiosos los intercambios que pueden tener lugar, entre otros, con los órganos encargados de vigilar la aplicación de los instrumentos internacionales de derechos humanos. El Gobierno de Sri Lanka espera con interés conocer las opiniones del Comité contra la Tortura sobre el primer informe que presenta, así como todas las sugerencias y críticas que ese órgano podría formular y que le ayudarían a fortalecer los procedimientos establecidos con el fin de aplicar la Convención contra la Tortura en el ámbito interno.

5. El principio de la protección contra los malos tratos ocupa un lugar en el derecho de Sri Lanka desde 1883. Las Constituciones de 1972 y de 1978 desarrollaron y consolidaron ese principio. En 1982, Sri Lanka depositó en poder del Secretario General de las Naciones Unidas una declaración unilateral sobre la tortura, inspirada en la declaración adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1975. En enero de 1994 el país se adhirió a la Convención contra la Tortura, que entró en vigor el mes siguiente y se incorporó al derecho interno en noviembre del mismo año, en virtud de la Ley N° 22 de 1994

que consolida así el marco jurídico en el que se lleva a cabo la lucha contra la tortura en Sri Lanka. Por otra parte, la definición de la tortura contenida en el derecho de Sri Lanka parece tener un alcance más amplio que la de la Convención.

6. En el informe que se examina, las autoridades de Sri Lanka se han esforzado en hacer resaltar los diversos elementos de la ley mencionada, al mismo tiempo que hacen hincapié, en particular, en las medidas adoptadas para combatir los actos contrarios a las disposiciones de la ley y en las instituciones establecidas para garantizar su cumplimiento, sin olvidar la cooperación internacional a la que recurren para que las ayuden en su labor. En efecto, son conscientes de que para combatir la tortura no basta con promulgar leyes y reglamentos: también es necesario que los principios jurídicos se concreten en hechos y se desarrollen mediante la adopción de nuevas medidas, de carácter legislativo, judicial, administrativo o de otra índole.

7. Se ha informado de excesos cometidos por determinados miembros de las fuerzas de seguridad en el marco de las actividades de lucha contra el terrorismo. El mismo reproche se ha hecho a los miembros de las fuerzas de policía. Es importante que se combatan esas prácticas, totalmente contrarias al código deontológico de los agentes del orden. El Gobierno no duda de que esas dificultades podrán superarse mediante la Ley N° 22 de 1994, que confiere al ministerio público facultades más amplias en materia de investigación y de enjuiciamiento en la materia.

8. En lo que respecta a la legislación, la nueva Constitución que se está redactando consolidará aún más las disposiciones destinadas a combatir los actos de tortura. En virtud de las nuevas disposiciones, los tribunales de Sri Lanka tendrán competencia para examinar las violaciones del derecho fundamental de toda persona de no ser sometida a la tortura ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Ese derecho no será objeto de limitación alguna. También se prohibirá la detención arbitraria que, por regla general, precede a los actos de tortura. Asimismo, se hará lo necesario para que todo arresto o detención sea transparente y se notifique a quien corresponda, con objeto de evitar en lo posible que se cometan actos de tortura. La nueva Constitución establecerá el principio de los enjuiciamientos en interés público, una verdadera innovación, que también puede ser un factor importante de disuasión.

9. En el ámbito administrativo, los órganos de represión han concebido diversos procedimientos en virtud de los cuales los agentes del orden, cualquiera sea su grado, al igual que los miembros de las fuerzas de seguridad que realizan operaciones de lucha contra el terrorismo o la insurrección, deben notificar todo arresto o detención a sus superiores y a los familiares del interesado. De ese modo, toda detención es reconocida e inscrita en un registro. Se ha comprobado que es el mejor medio de impedir que los terroristas o las personas que realizan actividades subversivas sean objeto de actos de tortura. Además, los agentes que proceden a un arresto, deben notificarlo en un plazo de 48 horas a una de las diez oficinas regionales de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Por último, las fuerzas de seguridad, mediante una disposición presidencial de fecha 17 de septiembre de 1997, han recibido instrucciones detalladas sobre el trato a los detenidos. El hecho de omitir deliberadamente la notificación de un arresto o de una detención es motivo de acciones penales. Se ha informado a la tropa y a los agentes de policía que todo acto de tortura será sancionado por las disposiciones de la Ley N° 22 de 1994.

10. En el informe que se examina se hace referencia a los mecanismos establecidos por el Gobierno para garantizar el respeto de las disposiciones adoptadas en materia de lucha contra la tortura; de ese modo la Comisión Nacional de Derechos Humanos, institución independiente creada en virtud de una decisión del Parlamento en 1997, tiene el cometido de garantizar constantemente la seguridad y el bienestar de los detenidos. Con ese objetivo, sus miembros visitan sin previo aviso comisarías de policía y lugares de detención. Las oficinas regionales de la Comisión cumplen funciones de información y sirven de marco a los procedimientos de denuncia. Existe un conjunto de organizaciones no gubernamentales que realizan también el seguimiento de la situación en las prisiones. En 1989, se invitó al Comité Internacional de la Cruz Roja a que abriera una delegación en el país: sus delegados tienen acceso libre a todos los lugares de detención, pueden mantener entrevistas confidenciales con los detenidos y elaborar informes sobre el trato que se les dispensa, así como informar a las autoridades competentes sobre todos los problemas que se les planteen.

11. El Sr. MAVROMMATIS (Relator para Sri Lanka) observa que el informe inicial de Sri Lanka, presentado por cierto con más de dos años de retraso, se ajusta a las directrices establecidas en la materia por el Comité. El documento básico (HRI/CORE/1/Add.48), sin duda debería ser objeto de una actualización: sería necesario que aportara precisiones sobre las garantías de la independencia de los magistrados, la estructura del poder judicial y el sistema de los tribunales, así como también sobre la función que desempeñan en defensa de los derechos humanos las grandes instituciones del país y la Oficina del Fiscal General.

12. En lo que respecta a la situación general en Sri Lanka, el Sr. Mavrommatis recuerda que el Gobierno combate desde hace años los actos terroristas cometidos por un movimiento secesionista. No obstante, los actos de violencia de los partidarios de ese movimiento parecen haber suscitado por reacción la perpetración de actos de la misma índole por parte de los miembros de las fuerzas armadas y de seguridad, y se corre el riesgo de que continúe esa situación si no se adoptan medidas concretas y eficaces. De hecho, pese a las numerosas denuncias de actos de tortura y de malos tratos imputables a las fuerzas de seguridad y de policía del país, Sri Lanka decidió en 1994 adherirse a la Convención contra la Tortura, lo que indica claramente que el Gobierno tiene la firme intención de poner término a esos excesos. Las informaciones facilitadas por la delegación de Sri Lanka parecen confirmarlo. Según estudios elaborados por la Universidad de Jaffna, la situación habría mejorado a consecuencia de las reformas introducidas recientemente en el ámbito político y gracias a las medidas adoptadas por las propias fuerzas armadas. Las represalias masivas serían la excepción, hecho que resulta alentador; no obstante, las decisiones adoptadas por los tribunales revelan que los agentes de policía siguen cometiendo actos ilícitos, en particular actos de tortura, hecho que el Sr. Mavrommatis atribuye a la falta de una represión rápida y eficaz de esos actos. A su juicio, los tribunales optan muy a menudo por la adopción de medidas disciplinarias contra los culpables y por la indemnización de las víctimas, mientras que en muchos casos sería necesario iniciar acciones judiciales contra los primeros. El Sr. Mavrommatis invita al Gobierno de Sri Lanka a considerar las medidas que aún podría adoptar para combatir más eficazmente la práctica de la tortura.

13. Se desprende del informe bajo examen (párr. 11) que Sri Lanka ha adoptado la decisión de ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de

Derechos Civiles y Políticos; cabe preguntarse qué impide al país hacer la declaración prevista en el artículo 22 de la Convención. De manera más general, el Sr. Mavrommatis se pregunta qué lugar ocupa el Convenio en el derecho de Sri Lanka y cuál prevalece en caso de divergencia, entre el derecho interno y la Convención. En el informe se precisa (párr. 6) que se ha promulgado una ley a fin de aplicar en la práctica las obligaciones asumidas por Sri Lanka en virtud de la Convención: ¿significa esto que la Convención no es directamente aplicable en el país? Pregunta además si los tribunales pueden basar sus decisiones en las recomendaciones y observaciones formuladas por el Comité contra la Tortura o, por ejemplo, por el Comité de Derechos Humanos.

14. Pasando al examen de la aplicación de la Convención, artículo por artículo, el Sr. Mavrommatis observa que en el informe no se menciona el artículo 1 de la Convención, que contiene una definición de la tortura. Reconoce que las informaciones relativas al artículo 2, proporcionadas en el informe, aportan un elemento de respuesta a este respecto. No obstante, el Sr. Mavrommatis indica no estar convencido de que la definición adoptada por las autoridades de Sri Lanka sea más amplia que la de la Convención. Entre otras cosas, esta última no atribuye a los sufrimientos infligidos un sentido más restrictivo que el de las decisiones de la Corte Suprema (párr. 48 del informe). A diferencia de la Convención, las decisiones de la Corte Suprema consideradas no proporcionan detalles sobre la finalidad con la que se infligen los sufrimientos, lo cual, a su juicio, permite que se corra el riesgo de que los integrantes de las fuerzas de seguridad y de policía eludan su responsabilidad. Es cierto que la Ley N° 22 de 1994 define esos objetivos en su artículo 12, aunque no aborda la cuestión de las penas extraordinarias. Las autoridades de Sri Lanka deberían estudiar la cuestión más a fondo y prever la ampliación de la definición de la tortura en el derecho interno si resulta ser más restrictiva que la definición enunciada en el artículo 1 de la Convención.

15. En relación con el artículo 2 de la Convención, al mismo tiempo que rinde homenaje a las autoridades judiciales por los medios que aplica para combatir la tortura, el Sr. Mavrommatis cree advertir en los propios textos legislativos una tendencia a favorecer el otorgamiento de indemnizaciones en detrimento de la prevención. Esta preferencia priva a la lucha contra la tortura de un cierto peso e incluso puede llegar a favorecer la impunidad.

16. Recordando que las fuerzas de seguridad y de policía suelen dudar cuando se trata de aplicar medidas disciplinarias contra los que pertenecen a su mismo cuerpo, el Sr. Mavrommatis pregunta si existen mecanismos para garantizar la independencia de las investigaciones cuando esas categorías de personal son objeto de alguna acusación.

17. El Sr. Mavrommatis desea conocer también cuáles son las condiciones que rigen la detención administrativa. Expresando su satisfacción por la reciente creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y porque se haya previsto abrir oficinas regionales de la Comisión, en particular una en Jaffna, pide precisiones sobre el sistema de nombramiento de los miembros de la Comisión, así como del cumplimiento de sus recomendaciones y decisiones.

18. En relación con los párrafos 72 y 73 del informe, que se refieren a las normas de la prueba, el Sr. Mavrommatis observa con inquietud que la legislación de excepción dispone una desviación respecto de las normas establecidas para las pruebas, en virtud de las cuales no son admisibles las confesiones obtenidas por coacción. Desea saber si las acusaciones de desaparición forzada reciben la

atención que merecen y si, por ejemplo, en la actualidad se llevan a cabo investigaciones o procesamientos. El Comité también ha tenido conocimiento de acusaciones por las que se denuncia la existencia de lugares secretos de detención, y pide información al respecto.

19. En cuanto al artículo 3 de la Convención, el Sr. Mavrommatis pregunta si la Ley de extradición de Sri Lanka corresponde realmente al segundo párrafo de dicho artículo, en virtud del cual las autoridades deben tener en cuenta la posible existencia de un cuadro de violaciones manifiestas de los derechos humanos. En relación con el artículo 7 de la Convención, el Sr. Mavrommatis desea saber si existen mecanismos para garantizar la independencia del poder judicial, recordando que no se trata únicamente de los criterios que rigen el nombramiento de los jueces, sino también de otros criterios, entre los cuales su inamovilidad es uno de los más importantes. Por otra parte, habida cuenta de que los actos de tortura o los malos tratos son más frecuentes durante las primeras horas de la detención, pregunta a partir de qué momento el sospechoso tiene derecho a la asistencia de un abogado.

20. Por último, con respecto al artículo 16 de la Convención, el Sr. Mavrommatis solicita informes sobre las condiciones de encarcelamiento, el destino de las quejas presentadas por los presos y si el conjunto de esas cuestiones se rige por una ley específica.

21. El Sr. YU Mengjia (Correlator para Sri Lanka) expresa su pesar al Estado Parte por el asesinato del alcalde de Jaffna perpetrado la víspera, hecho revelador de la situación en el Estado Parte. Sus preguntas se referirán, en particular, a los artículos 10 y 15 de la Convención. Por lo que respecta al artículo 10, el Sr. Yu Mengjia expresa su satisfacción por la importancia que se otorga a los derechos humanos en la formación de los miembros de las fuerzas de seguridad y de policía y de los funcionarios de prisiones. Asimismo, indica que se imparte enseñanza a los miembros de las fuerzas armadas sobre las leyes de guerra y el derecho humanitario. El Sr. Yu Mengjia desea saber si se han evaluado los resultados de ese esfuerzo en materia de capacitación y si se imparte una enseñanza específica sobre la prohibición de la tortura.

22. En lo que se refiere al artículo 11 de la Convención, el Sr. Yu Mengjia observa que se ha creado un Comité Especial del Parlamento para la Reforma Constitucional, que en 1993 se introdujeron modificaciones a la reglamentación de excepción y que las disposiciones relativas al arresto y la detención se revisan periódicamente. En ese contexto general, desearía saber si existe un mecanismo independiente encargado de recibir las denuncias de malos tratos que puedan presentarse. Asimismo, desearía conocer cuál es la duración máxima de la detención provisional, incluida la dictada en virtud de la reglamentación de excepción y pregunta si el sospechoso puede recurrir inmediatamente a un abogado de su elección. Pregunta también si una persona indigente detenida tiene derecho a que se le asigne un abogado de oficio.

23. Según diversas fuentes, los reglamentos de excepción y la Ley sobre la prevención del terrorismo se invocan a menudo para suspender los derechos fundamentales garantizados tanto por la Convención contra la Tortura como por otros instrumentos internacionales; el Sr. Yu Mengjia pide información a ese respecto. Por otra parte, pregunta en qué fase se encuentra el proyecto de la nueva Constitución.

24. Con respecto a los artículos 12 y 13 de la Convención, que obligan al Estado Parte a proceder a una investigación pronta e imparcial en caso de acusación de tortura, el Sr. Yu Mengjia pregunta qué medidas se han previsto para garantizar la imparcialidad de las investigaciones llevadas a cabo en caso de denuncias contra agentes de la policía. En lo que respecta a las denuncias de desapariciones, que, según algunas fuentes, están acompañadas algunas veces de tortura, pregunta si las denuncias de esos hechos dan lugar, sin dilaciones, al comienzo de una investigación y si, de no ser fundadas, el Estado Parte hace un desmentido oficial. En relación con el párrafo 116 del informe, en el que se dice que un agente de policía tiene facultades para hacer comparecer a las personas que puedan ofrecer información, así como también interrogarlas y registrarlas, desea saber si es necesario contar con una orden judicial a tales efectos.

25. En lo que respecta al artículo 14, el Sr. Yu Mengjia desearía saber si la víctima de un acto de tortura tiene derecho a la reparación y a una indemnización y si en caso de insolvencia del torturador, el Estado Parte se hace cargo de la responsabilidad. De manera más general, observa con preocupación que según ciertas fuentes, el Estado Parte acepta de buen grado otorgar una indemnización a las víctimas, aunque sin iniciar acciones judiciales contra los culpables. Solicita que se confirmen o que se desmientan esas acusaciones. Por último, indica que, a su entender, existe una incompatibilidad entre las disposiciones de la legislación relativa a determinados delitos graves que afectan a la seguridad del Estado, por las que se prevé la admisibilidad de las confesiones efectuadas en determinados casos y el artículo 15 de la Convención. Asimismo, desearía que se facilitara al Comité el texto íntegro de dicha ley.

26. El Sr. SØRENSEN subraya que el Comité es consciente de las dificultades con que tropieza Sri Lanka en su lucha contra el terrorismo, pero insiste en que sólo los medios lícitos son admisibles. Por tanto, lamenta que se sigan cometiendo actos de tortura, aunque aprecia que el Estado Parte haya reconocido la importancia de la capacitación como instrumento de lucha contra la tortura. En efecto, varios párrafos del informe se dedican a los esfuerzos desplegados en esa esfera. En relación con los párrafos 104 y 105, el Sr. Sørensen pregunta si las profesiones médicas están vinculadas directamente a la capacitación de las fuerzas de policía y de los funcionarios de prisiones. Afirma que uno de los medios más eficaces para combatir la tortura consiste en modificar las formas de pensar y los comportamientos de la policía y, en ese aspecto, los médicos están en buena situación para hacerle comprender que la tortura no sólo menoscaba la dignidad de la víctima, sino también la del que la inflige y la de toda la sociedad.

27. El Sr. Sørensen pregunta si los comités y comisiones encargados de revisar las leyes y prácticas específicas que tienen influencia sobre los derechos humanos, mencionados en el párrafo 108 del informe, obran de manera sistemática y si toda revisión da lugar a la elaboración y, eventualmente, a la publicación de un informe.

28. El Sr. Sørensen rinde homenaje a las numerosas organizaciones no gubernamentales que prestan servicios integrados médicos, psicológicos y de orientación a las víctimas de la tortura. A ese respecto, recuerda la importancia del 26 de junio, fecha en que se conmemora la entrada en vigor de la Convención contra la Tortura y que ha sido declarada por la Asamblea General, Día Internacional de las Naciones Unidas de Apoyo de las Víctimas de la Tortura.

En ese contexto, invita al Estado Parte a que considere formular las declaraciones previstas en los artículos 21 y 22 de la Convención y también hacer una nueva contribución al Fondo de Contribuciones Voluntarias para las Víctimas de la Tortura y, en general, a conmemorar oficialmente esa jornada, reconociendo así el sufrimiento de las víctimas.

29. El Sr. ZUPANCIC señala que en virtud del proyecto de constitución, la Corte Suprema tendrá la facultad de llevar a cabo el examen judicial de la legislación futura (párr. 15 del informe). Cabe preguntarse si la legislación actual seguirá en vigor, incluso si algunos de sus aspectos son contrarios a las disposiciones de la nueva Constitución. En lo que se refiere a la cuestión de la indemnización, quiere saber quién asume la responsabilidad si la persona reconocida culpable o el Estado.

30. El PRESIDENTE da las gracias a la delegación de Sri Lanka y la invita a responder a las preguntas del Comité en la sesión siguiente.

31. La delegación de Sri Lanka se retira.

Se levanta la segunda parte (pública) de la sesión a las 11.20 horas